

Santiago, 16 de octubre de 2020

Señor

Sebastián Piñera Echeñique

Presidente de la República

Presente

Hemos sido notificados, a través de los medios de comunicación, que el 18 de octubre, su Gobierno pretende disponer de 40 mil efectivos policiales más para hacer “frente” a las manifestaciones de conmemoración, a un año del “estallido social”. Ante las graves violaciones de derechos humanos que se han vivido desde octubre del 2019 a la fecha, con cientos de detenidos hasta el día de hoy sin imputación de delito alguno más que participar de las manifestaciones; con cientos de mutilados por ser parte de la revuelta popular reclamando cambios profundos en nuestro país y manifestaciones reprimidas, todos hechos denunciados por informes internacionales y la Fiscalía Nacional, resulta al menos paradójal que la apuesta del Gobierno, a un año de las manifestaciones, siga siendo el control del “orden público” y la represión ante el legítimo derecho a manifestarse.

Como Central Unitaria de Trabajadores, tenemos plena conciencia que el mayor flagelo que enfrenta nuestro país hoy es la cesantía, los bajos salarios y la pobreza. Con millones de trabajadores y trabajadoras cesantes, cientos de miles con la incertidumbre de no saber si mantendrán o no sus empleos, con una economía que no puede repuntar producto de la baja capacidad de consumo, con políticas pública en extremo focalizadas como el IFE y un presupuesto restrictivo, es a todas luces evidente que la mayor y principal acción de un Gobierno es hacerse cargo en primer lugar de esta realidad, antes que seguir validado desde el Gobierno la violación a los derechos humanos que ha ejercido Carabineros.

Tal como lo hicimos el 19 de octubre del 2019, junto a Unidad Social -al ir a dejar una carta a La Moneda luego de decretar Estado de Emergencia y sacar los militares a la calle- con la misma convicción venimos, nuevamente, a señalar que pretender hacer de las manifestaciones un problema de “orden público”, es validar desde el Estado a una fuerza policial que no tiene ningún control, tal como lo ha señalado el último informe de Amnistía Internacional: *“El actuar desproporcionado y brutal de Carabineros no se habría dado si el Gobierno de Sebastián Piñera hubiese ejercido un control adecuado. Los esfuerzos del Ejecutivo fueron insuficientes y el discurso de apoyo incondicional a la labor policial alentó la continuidad de esta forma de operar en las manifestaciones sociales”*.

Las movilizaciones a partir del 18 de octubre lo que expresaron fue el agobio y la molestia de un país que se cansó de los abusos y de vivir a costa de una promesa incumplida de bienestar y desarrollo. Este proceso de movilización que abrió las puertas al actual Proceso Constituyente, no solo tiene el legítimo derecho a conmemorarse, sino que se deben dar las garantías democráticas que aseguren que no se transformará esta fecha en una jornada de represión y persecución contra quienes se manifiesten.

El anuncio de 40 mil efectivos más en las calles lo vemos con alarma y preocupación, pues tememos estar frente a una autoridad que, con tal de imponer el “orden público”, está dispuesta a poner en riesgo la vida de quienes dice defender, incluidos trabajadores y trabajadoras que, como en el caso de Fabiola Campillay, han sido atacadas cuando se dirigían a su trabajo. El apoyo irrestricto a Carabineros, incluso ante los montajes evidenciados por Fiscalía y el blindaje al general Director de Carabineros, Mario Rozas, confirman en los hechos que nuestros temores no son infundados.

No queremos que el 18 de octubre se transforme en una batalla contra los ciudadanos ni muchos menos tener que lamentar más muertes. En un tiempo donde la vocería del Gobierno ha estado marcada por la palabra violencia, hacemos un llamado a retroceder en los anuncios realizados, a respetar el Estado de Derecho y el derecho de los ciudadanos a manifestarse. No podemos seguir sometiendo a Chile a un estado de guerra permanente donde se insista en la tesis del “*enemigo poderoso*” al que se debe atacar.

El camino de la paz social solo es posible de construir con la salida del general Director de Carabineros Mario Rozas; con la verdad y justicia ante todas las violaciones a los derechos humanos que se han producido en el territorio nacional; avanzando en las reformas y promesas comprometidas en el marco de las movilizaciones desarrolladas durante el estallido social; garantizando el desarrollo del Plebiscito del 25 de octubre sin temores y dejando de perseguir a todos quienes han sido y son críticos del actuar del Gobierno. El NO a la impunidad es la mayor credencial democrática de estos tiempos.

Sin otro particular, firman por el Comité Ejecutivo,

Nolberto Díaz Sánchez

Secretario General
CUT – CHILE

Bárbara Figueroa Sandoval

Presidenta Nacional
CUT – CHILE